

CAPÍTULO III.

PETRO EN CIFRAS (2022-2025)

LA ECONOMÍA

Crecimiento del PIB: Tras la reactivación pospandemia, la economía colombiana creció un 7,5% en 2022, de acuerdo con las cifras del DANE (2022). Sin embargo, el impulso se agotó en 2023: el PIB aumentó apenas 0,6% ese año, reflejando una marcada desaceleración. En 2024 la economía mostró una ligera mejora, con un crecimiento en torno al 1,7%. Hacia 2025 se observan signos de recuperación: en el primer trimestre de 2025 el PIB creció 2,7% interanual y se proyecta cerrar 2025 con una expansión por encima del 2,5%.

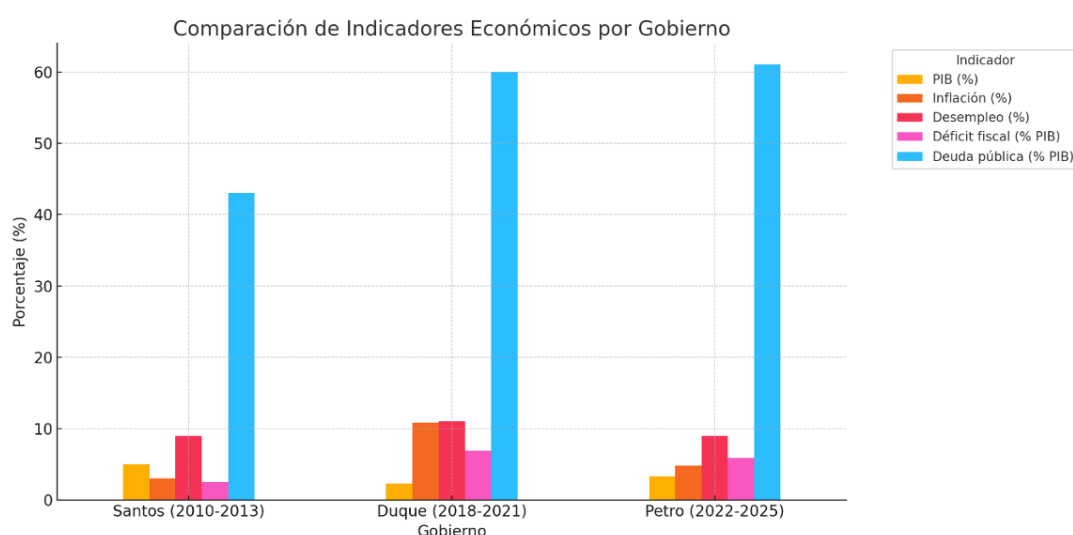
Inflación: Petro asumió la presidencia en agosto de 2022 con la inflación ya elevada (10,8% anual en agosto de 2022) debido a choques internacionales y la demanda post-Covid. La inflación siguió escalando y tocó un máximo de 13,3% anual en marzo de 2023, el nivel más alto en más de dos décadas. A partir de entonces inició una senda descendente: cerró 2023 en 9,28% y continuó bajando durante 2024. Para junio de 2025, la inflación anual se redujo hasta 4,82%, su nivel más bajo en 3 años, regresando cerca del rango meta del Banco de la República. Bajo Petro, aunque los precios subieron más en 2022-23, para 2025 la inflación finalmente convergió a un dígito, lo cual es un logro significativo en estabilidad de precios.

Empleo y Desempleo: El mercado laboral ha mostrado mejoras importantes. La tasa de desempleo nacional promedio fue 11,2% en 2022, descendiendo a 10,2% en 2023 (DNP. 2023). A finales de 2024 bajó a 10% e incluso alcanzó 9,1% en diciembre de 2024. Para junio de 2025, el desempleo nacional se redujo hasta 8,6%, el nivel más bajo en muchos años DANE 2025. Este descenso refleja la recuperación gradual del empleo tras la pandemia y el ligero repunte económico reciente. No obstante, persiste alta informalidad laboral (alrededor del 59% de los nuevos empleos son informales) lo que indica desafíos en la calidad del empleo generado. Comparativamente, Santos logró reducir el desempleo del 12% al 9% en sus primeros años, mientras que Duque enfrentó un pico histórico de 20+% durante 2020 (pandemia) antes de bajar nuevamente a 11% en 2022. En el gobierno Petro, el desempleo

ha seguido cayendo de forma consistente, situándose por debajo de los niveles prepandemia, lo cual es un indicador macroeconómico favorable.

Deuda Pública: La deuda de Colombia se elevó significativamente a raíz de la pandemia y permanece en niveles históricamente altos. El Gobierno Petro heredó en 2022 una deuda bruta del Gobierno Nacional Central cercana al 60% del PIB según el Ministerio de Hacienda. Gracias a la alta recaudación y crecimiento de 2022, esta proporción bajó ligeramente a 59,6% del PIB al cierre de ese año. Sin embargo, con los déficits posteriores (ver sección fiscal), la deuda volvió a aumentar. En 2023 la deuda pública superó 61% del PIB, marcando un récord histórico para Colombia. De hecho, organismos independientes proyectan que la deuda continuará en máximos hacia 2025, reflejo del abultado déficit fiscal. En contraste, bajo Juan M. Santos la deuda se mantuvo cercana a 40-45% del PIB, y con Duque saltó a 60% tras el choque del Covid-19. El nivel actual de endeudamiento es una fuente de preocupación: encarece el servicio de la deuda (los pagos de intereses son uno de los rubros de gasto público que más crecen) y ha deteriorado la percepción de riesgo crediticio del país. Esto se evidencia en tasas de interés de los títulos de deuda pública (TES) aún elevadas en comparación a pares regionales, y en la posible pérdida de acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI debido al deterioro fiscal.

Gráfico. 6. Comparación de indicadores macroeconómicos por Gobierno. 2010-2025. Fuente: DANE. Procesamiento PARES.



EL EMPRESARIADO

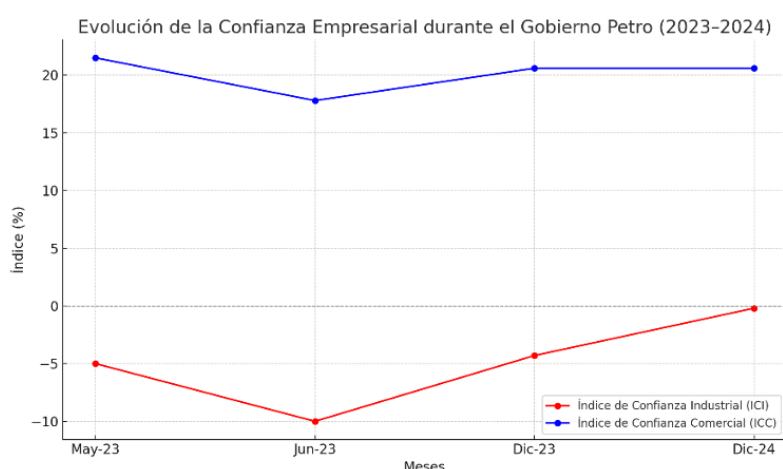
Inversión Extranjera Directa (IED): A pesar de las incertidumbres políticas, Colombia ha continuado recibiendo flujos significativos de IED durante el gobierno Petro. En 2022, impulsada por los altos precios de las materias primas, la IED alcanzó USD 17.183 millones (un alza notable frente a 2021). En 2023, Colombia marcó un récord histórico de IED con USD 17.446 millones ingresados, apenas +1,5% respecto al año anterior, pero suficiente para ser la cifra anual más alta desde que hay registros (1994). Este repunte estuvo liderado por reinversiones en el sector minero-energético: por ejemplo, la IED en explotación de minas y canteras fue de USD 3.290 millones en 2023, creciendo +177% gracias a los extraordinarios pagos de impuestos y retenciones de las empresas mineras (ingresos que se contabilizan como reinversión extranjera).

En lo corrido de 2024 se observó una disminución de la IED frente al año anterior, en línea con la menor dinámica económica interna y un entorno internacional menos propicio. De hecho, la IED habría caído alrededor de un 15% en 2024 frente a 2023, volviendo a un nivel aproximado de USD 14.8 mil millones (según datos del Banco de la República). Esta baja se explica en parte por la reducción de inversiones en hidrocarburos y por la cautela de inversionistas ante la incertidumbre regulatoria en sectores clave como energía (renovables) y salud. No obstante, comparado con administraciones pasadas, el volumen de IED bajo Petro se mantiene robusto: en la era Santos, la IED promedió unos USD 13-16 mil millones anuales durante la bonanza petrolera 2011-2014; con Duque, hubo altibajos (mínimo de USD 7,5 mil millones en 2020 por la pandemia, seguido de recuperación a USD 9,6 mil en 2021 y el salto a USD 17 mil en 2022). El gobierno Petro ha logrado sostener esos flujos elevados hasta ahora. Además, es destacable que cerca de 66% de la IED en 2023 se dirigió a sectores no minero-energéticos, lo cual sugiere diversificación (incluyendo manufacturas, servicios y energías limpias).

La gráfica a continuación muestra la evolución diferenciada de la confianza empresarial durante 2023 y 2024 bajo el gobierno Petro. El Índice de Confianza Industrial (ICI) permaneció en terreno negativo en 2023, reflejando el pesimismo del sector manufacturero frente a

la incertidumbre regulatoria y la baja demanda. Sin embargo, hacia diciembre de 2024, el indicador mejoró a -0,2%, lo que sugiere una percepción menos adversa, aunque aún no positiva. Por su parte, el Índice de Confianza Comercial (ICC) se mantuvo en terreno positivo durante todo el periodo, aunque con fluctuaciones: descendió de 21,5% en mayo de 2023 a 17,8% en junio, para luego repuntar a 20,6% en diciembre. Esta recuperación paulatina se asocia a la desaceleración de la inflación, la baja en tasas de interés y una mejora estacional en las ventas de fin de año.

Gráfico. 7. Evolución de la confianza industrial y confianza comercial durante el gobierno Petro. 2022 - 2024. Fuente: FEDESARROLLO



El clima de inversión durante el gobierno Petro ha sido mixto. Persisten inquietudes en el sector privado sobre la seguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria, alimentadas por reformas fallidas, cambios ministeriales y tensiones con el Congreso. La ANDI y encuestas financieras reflejan aumento en la percepción de riesgo. Sin embargo, la inversión extranjera se mantuvo alta hasta 2023, y la confianza local mejoró levemente en 2024 con la moderación de la inflación y el tipo de cambio.

El peso colombiano, que se depreció tras la elección de Petro, se estabilizó en 2023, y el déficit externo cayó de 6% a 2,2% del PIB, señalando mayor equilibrio externo. A nivel internacional, Colombia es vista como una economía resiliente pero vulnerable: mantiene calificación BB+ sin mejoras por el deterioro fiscal. La confianza a futuro

dependerá de que el gobierno garantice reglas claras y disciplina fiscal. Decisiones recientes como moderar reformas polémicas han sido bien recibidas, aunque persisten reservas sobre nuevos cambios tributarios y la inseguridad regional.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La transición energética ha sido uno de los pilares discursivos y programáticos del gobierno de Gustavo Petro, articulada como una “transición justa” orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y transformar la matriz productiva del país. El gobierno ha introducido reformas fiscales, regulatorias y de inversión pública que, en conjunto, constituyen un andamiaje normativo y financiero más robusto que el de administraciones anteriores. Entre ellas destacan la eliminación progresiva de subsidios a los combustibles fósiles, la creación de impuestos verdes (como el tributo a las exportaciones extraordinarias de petróleo y carbón), la ampliación del impuesto al carbono y medidas de impulso fiscal para las energías renovables.

El marco legal también se consolidó: en 2023 se aprobó la Ley de Acción Climática (Ley 2294), que formaliza metas de transición energética justa, y se elaboró una hoja de ruta nacional para la transición. A nivel internacional, se suscribieron acuerdos de financiamiento bilateral (por ejemplo, con Alemania por EUR €200 millones) para hidrógeno verde y energías renovables.

El gobierno cumplió parcialmente su promesa de no expandir la frontera extractiva: no se han adjudicado nuevos contratos de exploración petrolera o gasífera. Si bien esto generó preocupación en el sector sobre la sostenibilidad de la renta petrolera y la autosuficiencia energética futura, la producción se ha mantenido estable (777 mil barriles diarios en 2023; 772 mil en 2024), y las reservas aumentaron a 7,2 años de cobertura, superando momentáneamente lo producido. Ecopetrol ha adoptado una estrategia híbrida, manteniendo producción mientras avanza en proyectos de energías limpias y fertilizantes.

La capacidad solar instalada se multiplicó más de seis veces, pasando de 279 MW (2022) a 1.916 MW (2025), y se construyeron 110 nuevos parques solares, incluyendo el Guayepo (370 MW), el mayor del país. Colombia subió al puesto 35 en el Índice de Transición Energética

Global. Sin embargo, el sector eólico ha enfrentado un estancamiento crítico: proyectos clave en La Guajira fueron cancelados por trabas regulatorias, retrasos ambientales y conflictos sociales no gestionados adecuadamente. Empresas como EDP Renewables y Enel se retiraron, lo que se interpretó como una “crisis de confianza” en el sector, atribuida a la lentitud institucional y falta de claridad normativa.

Comunidades energéticas y descentralización

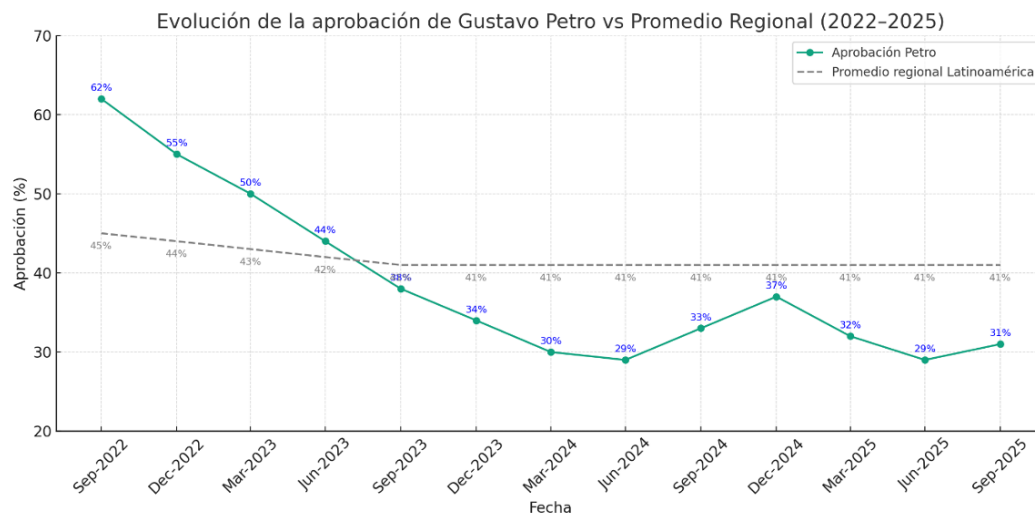
Uno de los avances más visibles ha sido la instalación de paneles solares en zonas rurales a través del programa de Comunidades Energéticas. A 2025 se han implementado 250 proyectos en 14 departamentos, incluyendo escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, contribuyendo a la equidad territorial de la transición. Sobre este particular uno de los retos es la administración y mantenimiento comunitario de los paneles y la instalación de la capacidad comunitaria necesaria para garantizar su sostenibilidad.

LA PERCEPCIÓN DEL PRESIDENTE

Tendencia general de aprobación y favorabilidad (2022-2025)

La popularidad del presidente varía sustancialmente según las encuestas que lo midan. Sin embargo, todas coinciden en que ha estado llena de altibajos, estando entre 27 y 30% el menor número de aprobación, y entre 62 y 66% el más alto al inicio del mandato. También coinciden las encuestas en que la evolución de la popularidad del presidente ha estado llena de altibajos como lo muestra la gráfica a continuación.

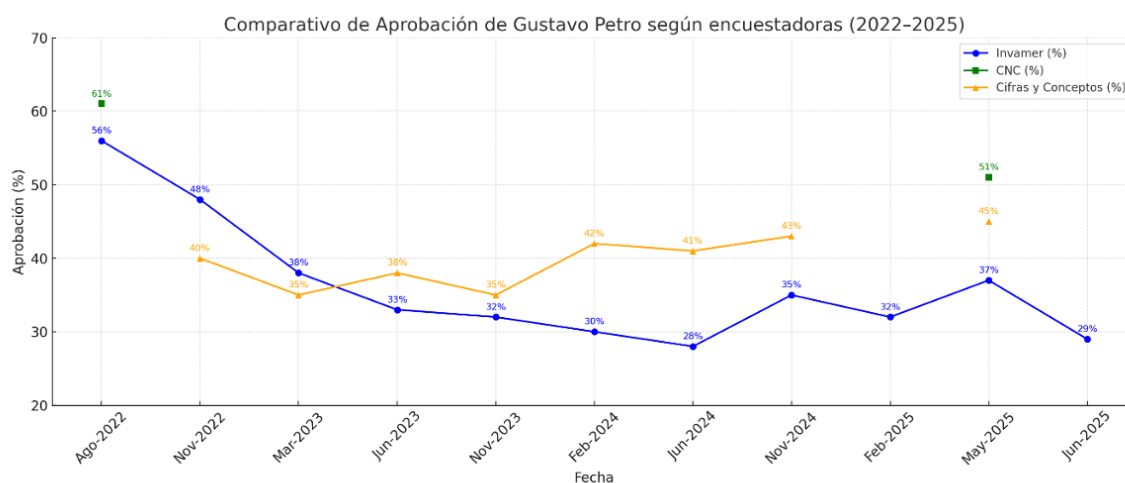
Gráfico. 8 Aprobación de Gustavo Petro vs promedio América Latina. 2022 – 2025. Fuente: INVAMER poll. Latinbarómetro, Bloomberg Línea. Cálculo y procesamiento PARES.



En otras mediciones como la del Centro Nacional de Consultoría, el presidente inicia con una imagen favorable cercana al 69% y desfavorable del 20%. Sin embargo, a medida que avanzó el mandato, la popularidad sufrió caídas pronunciadas. Para finales de 2022 e inicios de 2023, las encuestas ya reflejaban un descenso hacia niveles cercanos al 46–50% de aprobación. Hacia mediados de 2023, tras varios meses de gobierno, la aprobación bajó aún más –38% en junio de 2023 según Polimétrica de Cifras & Conceptos– y por primera vez la desaprobación superó la aprobación.

Durante el segundo semestre de 2023 la tendencia negativa se acentuó. Diversos escándalos y dificultades (detallados más adelante) llevaron la aprobación de Petro a sus niveles más bajos. A finales de 2023 registró mínimos históricos: la encuesta Invamer de diciembre de 2023 situó su aprobación alrededor de 26–32%, con desaprobaciones de hasta 62–66%, las más altas de su mandato. En ciudades como Medellín, la desaprobación llegó a 77% en ese momento. En otras palabras, aproximadamente sólo 1 de cada 4 colombianos aprobaba su gestión al cerrar 2023.

Gráfico. 9. Comparativo de apropiación de Gustavo Petro según encuestadoras. Fuente: Invamer, CNC y Cifras y Conceptos. Procesamiento y cálculo: PARES



A inicios de 2024 la imagen del presidente mostró cierto repunte. Tras una crisis de gabinete y cambios de estrategia, la aprobación nacional subió ligeramente a la franja media de los 30s. Por ejemplo, a febrero de 2024, Invamer medía una aprobación del 35–40%. No obstante, la desaprobación seguía rondando el 60%. Durante los primeros meses de 2024 diferentes encuestas presentaron resultados dispares –algunas más favorables que otras–, pero coincidiendo en que Petro mantenía un apoyo minoritario cercano a un tercio del electorado. Hubo incluso fuertes divergencias: una polémica encuesta del CNC contratada por la Presidencia (DAPRE) en julio de 2024 le otorgó 47% de aprobación, mientras que simultáneamente Datexco Opinómetro reportó solo 25% de aprobación. Estas variaciones reflejan diferencias metodológicas y posibles sesgos, por lo cual es útil promediar múltiples encuestas. De hecho, el “ponderador” de La Silla Vacía –que agrupa resultados de Invamer, Datexco, CNC, Yanhaas, Guarumo, etc.– estimó que en agosto de 2024 Petro tenía alrededor de 32–34% de aprobación y aprox. 60% de desaprobación, prácticamente el mismo balance negativo que sus mínimos previos.

Entrando a 2025 se observó una leve recuperación seguida de una nueva caída. A fines de abril de 2025 Invamer sorprendió con una mejoría al 37% de aprobación (su mejor dato en más de un año) y una caída de la desaprobación al 57%. Este repunte se atribuyó a un cambio de narrativa gubernamental y al respaldo popular de banderas

como la reforma laboral (tras su hundimiento en el Congreso). Sin embargo, el efecto fue efímero. Para junio de 2025, la misma Invamer mostró que la aprobación volvió a caer al 29% y la desaprobación subió al 64%, alcanzando de nuevo niveles críticos. En otras palabras, a mediados de 2025 alrededor de dos tercios de los colombianos desaprobaban la gestión de Petro. Otras firmas confirmaron esta tendencia: por ejemplo, el Pulso País de Datexco (julio 2025) arrojó 35% de aprobación vs. 58% de desaprobación –una ligera mejora respecto a inicios de año, pero aún con saldo ampliamente negativo. En suma, entre agosto de 2022 y agosto de 2025 la imagen de Petro pasó de una favorabilidad mayoritaria (más del 60%) a un rechazo mayoritario (cerca del 60–65%). Su piso de apoyo estable se ha mantenido en torno al 25–30% del electorado, que parece ser el núcleo duro de seguidores que conserva incluso en los peores momentos.

Diferencias regionales en la opinión pública

Desde el comienzo de su mandato se observaron brechas regionales en la percepción del presidente. En la fase de luna de miel (agosto–septiembre 2022), Petro gozaba de altísima favorabilidad en la Costa Caribe y el suroccidente del país. Según CNC, a un mes de gobierno su imagen favorable alcanzaba 75% en la región Caribe y 75% en la Pacífica, y llegaba al 77% en Bogotá. Incluso en zonas tradicionalmente menos afines, como Antioquia y el Eje Cafetero, iniciaba con un 59% de imagen positiva (desfavorable de solo 24%). Estas cifras reflejaban el apoyo transversal que logró al inicio, con especial entusiasmo en la costa Atlántica, el Pacífico (regiones donde ganó con holgura en 2022) y la capital.

Con el transcurso del gobierno, las opiniones regionales se fueron polarizando más. Las regiones donde Petro había arrasado en votos han tendido a seguir mostrándose más favorables que el promedio nacional, aunque con disminuciones notables. Por ejemplo, en Barranquilla y la costa Caribe su aprobación seguía por encima del promedio en 2024–2025: un sondeo de mitad de 2025 señala que Barranquilla registraba un 43% de apoyo (frente a ~33% nacional) (ICP; Yanhass 2025). De igual forma, la región Pacífica se ha destacado por sostener el mayor respaldo relativo: en julio de 2024 Datexco midió allí la aprobación más alta, con 31,5% (en ciudades como Cali, Palmira, Pasto, Popayán) cifra baja en términos absolutos, pero superior a otras regiones en esa medición.

En contraste, zonas del interior y oriente del país se han tornado particularmente críticas. La región Oriental (Santanderes, Boyacá, Arauca, Meta, etc.) ha mostrado los mayores índices de rechazo: 65% de desaprobación en julio de 2024, la más alta entre regiones. Ciudades intermedias de esa zona (Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio) figuran entre las de opinión más negativa hacia Petro.

La región Andina central también refleja desencanto creciente, especialmente en Antioquia. Medellín se ha consolidado como la ciudad más opositora: encuestas Invamer han registrado allí apenas 22% de imagen favorable vs. 74% desfavorable (abril 2025) y fue la urbe con mayor desaprobación en 2023. Incluso Bogotá, que fue uno de sus bastiones iniciales, viró hacia una opinión adversa. En la capital, la aprobación cayó de 58% en agosto de 2022 a solo 28% a mediados de 2024, con un 66% de bogotanos desaprobando su gestión. Este dato es significativo porque Bogotá aportó importante voto de opinión a Petro; la pérdida de apoyo allí refleja la desilusión de electores de centroizquierda urbanos. Otras capitales han seguido dinámicas similares: Bucaramanga tuvo 44% de desaprobación a mediados de 2025, mayor al promedio; Cali, en cambio, se ha mantenido algo más benévola (40% de aprobación en la encuesta ICP/Yanhaas de junio 2025, superior a otras ciudades); En síntesis, Costa Caribe y Pacífico han sido los enclaves más favorables a Petro a lo largo de su mandato, mientras que la zona Andina oriental (incluyendo Santanderes) y Antioquia/Eje Cafetero concentran la mayor desaprobación. Bogotá, pese a su inclinación inicial favorable, hoy refleja indicadores de aprobación en línea con el bajo promedio nacional (o incluso inferiores, en torno al 28–33%).

Diferencias generacionales

La edad ha sido un factor determinante en la percepción de Gustavo Petro. Desde la campaña y el inicio de su gobierno, los jóvenes mostraron mayor entusiasmo hacia el mandatario que los mayores. En septiembre de 2022, la favorabilidad entre los colombianos de 18 a 25 años llegaba al 80%, significativamente más alta que en cualquier otro segmento etario (CNC, 2022). En los demás grupos de edad también predominaban opiniones positivas (superiores al 60% inicial), pero ninguna tan alta como en la juventud. Este apoyo juvenil se correlaciona con el rol protagónico de las movilizaciones de 2021 y el discurso de cambio que atrajo a muchos votantes jóvenes.

Conforme avanzó el gobierno, los jóvenes continuaron siendo el segmento más proclive a Petro, aunque con un marcado descenso en su apoyo. Los datos revelan caídas fuertes en la aprobación incluso entre los más jóvenes, que partían de niveles altos. Por ejemplo, en la franja de 18 a 24 años, la aprobación pasó de 78% en agosto de 2022 a 43% en agosto de 2024, perdiendo 35 puntos. En el grupo 25 a 34 años la disminución fue de 67% a 29% en el mismo periodo (-38 puntos). Aun después de estos descensos, los menores de 34 años siguen relativamente más alineados con Petro que los mayores: a mediados de 2025, tras un repunte y posterior caída, su aprobación en 18-24 años rondaba 41% (frente a solo ~29% nacional).

Opinión por nivel socioeconómico

Desde el inicio del gobierno se observó una brecha clara por nivel de ingreso. En septiembre de 2022, los estratos bajos (1 y 2) mostraban un respaldo masivo: 71 % de imagen favorable. Incluso en los estratos altos (5 y 6), el 62 % aprobaba al presidente, aunque con mayor proporción de imagen desfavorable (~30 %).

Con el paso del tiempo, la aprobación cayó en todos los segmentos, manteniéndose más alta —aunque erosionada— entre los sectores populares. Para agosto de 2024, en estratos 1 y 2 la aprobación era del 30 %, frente a una desaprobación del 64 %. En el estrato medio (3), los niveles eran similares. En los estratos altos (4-6), el apoyo descendía al 24 % y la desaprobación superaba el 70 %.

En 2025, esta tendencia se mantiene: los estratos bajos siguen siendo el núcleo de apoyo más fuerte, aunque reducido. En junio de 2025, la aprobación en estratos 1-2 era del 30 %, frente al 62 % de desaprobación. En contraste, en los estratos altos la desaprobación supera el 70 % y la aprobación apenas ronda el 20 %.

LA SEGURIDAD EN EL GOBIERNO PETRO

Dado que la Fundación PARES se encuentra en preparación de su informe anual sobre el estado de la paz y la seguridad en Colombia, para este informe de balance se presenta un análisis breve de las principales cifras relacionadas con seguridad en el gobierno Petro. Respecto al seguimiento a los procesos de paz en curso y la paz total en general, así como a la presencia de actores armados, los invitamos a consultar nuestro más reciente informe de balance de la Paz Total a [2025](#). Para comparar distintos años, las cifras se trabajaron año corrido en períodos de enero a junio, desde el 2018 al 2025.

Homicidio intencional

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018), los homicidios intencionales experimentaron una reducción sostenida. La cifra pasó de 14.871 casos en 2010 a 11.957 en 2017, consolidando el periodo más exitoso en términos de disminución de la violencia letal en lo que va del siglo. Este descenso coincidió con la fase de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, así como con un enfoque institucional orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En 2018, sin embargo, se registró un leve repunte con 12.573 homicidios.

Con la llegada de Iván Duque (2018–2022), la tendencia descendente se interrumpió. Aunque en 2020 se registró un mínimo de 12.010 casos —probablemente influenciado por los efectos del confinamiento—, a partir de 2021 los homicidios aumentaron de forma pronunciada, alcanzando 13.686 casos ese año y cerrando el mandato en 13.540 en 2022. La segunda mitad de su gobierno estuvo marcada por una intensificación de la violencia letal y la pérdida de la inercia de mejora alcanzada en el periodo anterior.

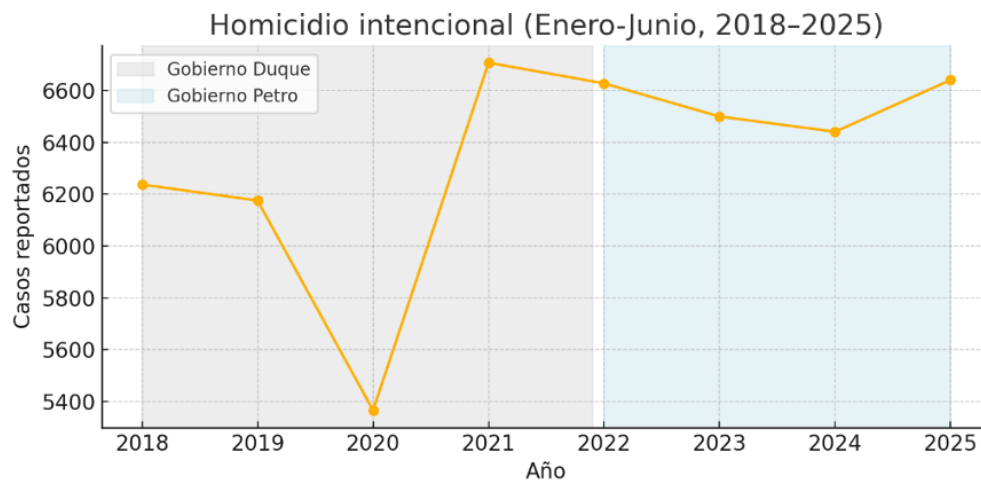
En el actual gobierno de Gustavo Petro (2022–2024), los niveles de homicidio se han mantenido prácticamente estables. El mandatario recibió el país con 13.540 casos y las cifras para 2023 (13.555) y 2024 (13.497) muestran una persistente meseta en torno a ese umbral. Aunque no se ha profundizado el deterioro, tampoco se observa una

tendencia de reducción estructural. La violencia homicida sigue instalada como un fenómeno crónico, sin señales claras de reversión sostenida.

Gráfico. 10. Homicidio intencional año completo 2018 – 2024. Fuente: Ministerio de defensa – Policía Nacional.

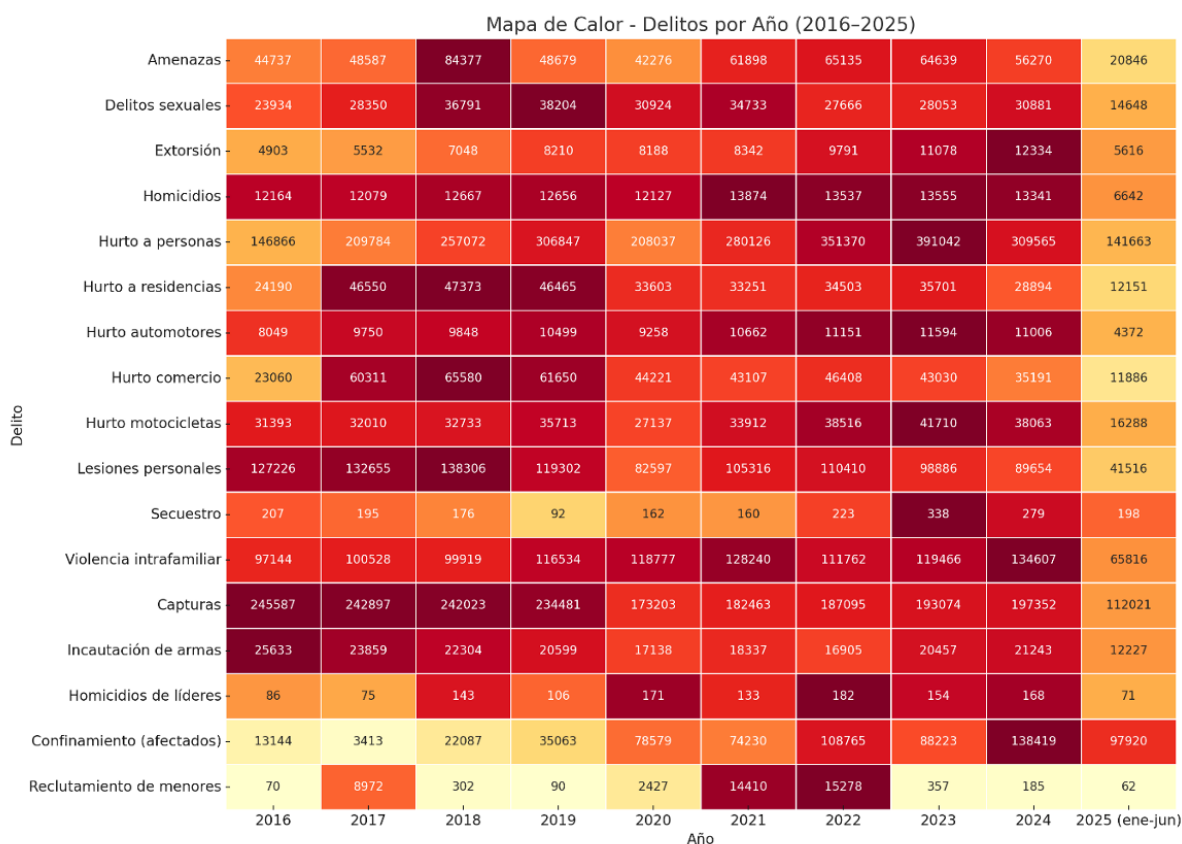


Gráfico. 11 Homicidio intencional año corrido enero-junio. Fuente: Ministerio de defensa – Policía Nacional. Procesamiento PARES



Respecto a otros delitos e indicadores de violencia, el mapa de calor a continuación muestra los puntos más críticos de diferentes delitos entre el 2016 y junio de 2025.

Gráfico. 12 mapa de calor por delitos y afectaciones a la vida e integridad. Fuente. Monitor Humanitario OCHA. Ministerio de Defensa y SIEDCO Policía Nacional



El cuatrienio de Iván Duque (2018-2022) coincide con una inflexión crítica en varios indicadores clave de seguridad. La tendencia de reducción de homicidios se interrumpe, alcanzando su punto más alto en 2021. Los hurtos a personas, motocicletas y comercios se disparan, especialmente tras el impacto de la pandemia, y la violencia intrafamiliar crece de manera constante hasta superar las 128.000 denuncias anuales. La criminalidad urbana se intensifica y la extorsión se consolida como una amenaza persistente, en un contexto marcado por la fragmentación del orden público, la expansión de economías criminales regionales y una institucionalidad desbordada, sin capacidad efectiva de contención ni de redistribución estratégica de la Fuerza Pública.

Durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro (2022–2025) se observan señales mixtas. Por un lado, se logra una contención relativa de los homicidios, aunque sin revertir la meseta alta heredada. Por otro, se reportan reducciones sostenidas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurtos y asesinatos de líderes sociales —aunque este último indicador sigue siendo problemático en varias regiones. Si estas reducciones se consolidan, podrían marcar un cambio de trayectoria en la seguridad ciudadana. Sin embargo, persisten desafíos estructurales en la contención de la violencia letal, la consolidación de una justicia territorial eficaz y la reducción de delitos de alto impacto asociados al crimen organizado. A esto se suma un fenómeno preocupante: en delitos cuya medición depende de las denuncias —como la extorsión, los delitos sexuales o la violencia basada en género— se observa una caída sostenida de la confianza institucional, especialmente en ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá, donde la criminalidad se ha sofisticado al punto de cooptar los canales tradicionales de reporte ciudadano.

A tres años del inicio del mandato de Petro, el panorama de seguridad presenta un perfil ambivalente: se han logrado avances en algunos frentes urbanos, en la protección de liderazgos sociales y en la interdicción de economías ilegales, pero persiste un escenario de inseguridad crónica en amplias regiones del país. Esta situación se agravó a partir de 2024 con la ruptura parcial de las mesas de diálogo con grupos armados ilegales, lo que desató una nueva fase ofensiva por parte de estas estructuras. Entre enero y junio de 2025, se registra un aumento de actos de terrorismo, asesinatos a miembros de la Fuerza Pública, secuestros extorsivos, trata de personas y homicidios intencionales. Este repunte sugiere que, en ausencia de mecanismos de contención política, los grupos criminales retoman la iniciativa militar y territorial, intensificando la presión sobre instituciones, comunidades y corredores estratégicos.

En este escenario, el desempeño de la Fuerza Pública ha sido más reactivo que estratégico. Aunque se reportan aumentos en las incautaciones de cocaína, bazuco, hoja de coca y maquinaria amarilla —lo que indica una mayor actividad operativa en zonas de cultivos ilícitos y minería ilegal—, también se incrementan las bajas y los heridos entre efectivos militares y policiales, reflejando la exposición creciente a entornos de confrontación sin una doctrina renovada ni un rediseño

funcional del despliegue estatal. Mientras que entre 2022 y 2023 aún persistían reglas tácitas de distensión derivadas de la política de paz total, el periodo 2024–2025 evidencia una regresión a la lógica de contención reactiva, con mayores niveles de enfrentamiento directo, más violencia contra infraestructuras y una criminalidad más desinhibida.

En los frentes urbanos, se han logrado contener parcialmente algunos delitos como el hurto a comercio, la violencia intrafamiliar y las lesiones personales, al tiempo que se avanza en la desvinculación de menores del conflicto armado. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la extorsión, el auge de los delitos informáticos y el repunte de la victimización contra la Fuerza Pública demuestran que el control estatal sigue siendo débil frente a un crimen organizado que muta, negocia y, cuando lo considera útil, combate. En suma, la política de seguridad del actual gobierno no puede calificarse como fallida, pero tampoco ha sido transformadora: ha mostrado capacidad de respuesta en frentes críticos, pero sigue sin una arquitectura sólida de seguridad integral, con enfoque territorial, articulación institucional y legitimidad sostenida.

Delito

Abigeato	2134	1742	1217	1240	1269	1062	824	312
Actos de terrorismo (Art. 144)	79	58	63	72	91	127	269	295
Aeronaves incautadas	44	28	18	14	23	78	138	97
Apoderamiento de hidrocarburos -					125	186	228	202
Asesinados Fuerza Pública	65	57	47	60	78	37	39	92
Asesinados Fuerzas Militares	22	30	36	27	51	24	27	54
Asesinados Policía Nacional	43	27	11	33	27	13	12	38
Aspersión de coca (hectáreas) -								
Atentados contra la infraestructura crítica	77	40	78	17	50	38	23	35
Base de coca incautada (kg.)	15343	31808	35117	42889	53363	30264	47495	47619
Basuco incautado (kg.)	1006	802	633	765	823	669	598	659
Capturas (Per)	883	1113	878	1033	673	707	770	815
Cocaína incautada (kg.)	221813	208239	237651	327800	364899	320623	441297	486964
Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente	2922	2855	2202	2233	1642	1994	1898	1490
Delitos informáticos	10426	9900	19835	27958	31447	29720	36120	31962
Delitos sexuales	18122	18823	15121	17422	15206	12792	15401	14648
Desmovilizados ELN (mayores de edad)	154	140	115	65	61	30	51	49
Desvinculación de menores de edad	75	80	52	108	102	130	151	210
Embarcaciones incautadas	98	106	118	210	205	206	198	121
Erradicación manual de coca (hectáreas)	24647	38395	39465	38204	40276	6311	2183	2683
Extorsión	3630	4406	3086	3542	3911	4664	6056	5616
Heridos Fuerza Pública	449	439	313	705	420	180	213	393
Heridos Fuerzas Militares	64	159	100	150	220	69	105	254
Heridos Policía Nacional	385	280	213	555	200	111	108	139
Heroína incautada (kg.)	223	188	174	187	289	464	140	258
Hoja de coca incautada (kg.)	227159	277351	311364	369441	318185	470958	451593	470556
Homicidio en accidentes de tránsito	2987	2841	2149	3286	3637	3567	3519	3541
Homicidio intencional	6238	6176	5365	6709	6629	6501	6442	6642
Hurto a comercios	33079	31591	23077	22158	23323	25238	21437	11886
Hurto a entidades financieras	94	51	41	61	65	47	32	28
Hurto a personas	122373	144983	98981	123246	154386	198160	159827	141663
Hurto a residencias	23812	23718	15484	15963	15560	18602	15382	12151
Hurto automotores	4773	5255	3935	4697	5468	5788	6012	4360
Hurto de motocicletas	16349	17295	12244	16128	18490	21170	20457	16300
Hurto de vehículos	21122	22550	16179	20825	23958	26958	26469	20660
Incautación de Mercurio (Kg)	33	1168	132	164	184	114	57	114
Incautación de Oro (Kg)	42	425	20	63	44	63	19	21
Infraestructura de producción de drogas ilícitas destruida (und)	2043	3171	2978	3217	2373	2624	2567	3376
Insumos líquidos incautados (gls.)	2527881	2972995	2524687	1780634	1308574	2041841	2275364	1509441
Insumos sólidos incautados (kg.)	10721728	11597283	6694840	3296646	921957	1831757	2144533	994821
Invasión de tierra o edificaciones	686	654	497	689	493	499	541	311
Invasión de tierras	815	754	555	821	583	566	617	375
Lesión personal	70222	62887	40189	48609	52892	45941	43520	41516
Lesión personal en accidente de tránsito	27455	19998	13195	15885	21959	25289	23997	22054
Maquinaria Amarilla (Retroexcavadoras y Buldócer) (Und)	126	220	144	207	194	245	311	400
Marihuana incautada (kg.)	124905	202349	238629	336021	197355	213938	287701	206958
Masacres (casos) -					41	49	40	36
Masacres (víctimas) -					138	166	136	122
Minas ilegales intervenidas (Und)	1172	2009	2728	1933	1319	1901	2959	3383
Otra Maquinaria (Draga, Clasificadora, Mezcladora y Trituradora) (Und)	152	300	500	291	409	365	397	466
Piratería terrestre	192	177	154	84	76	80	79	56
Pistas destruidas	0	2	1	3	5	1	1	0
Rescate de secuestrados	19	23	18	12	29	37	32	33
Secuestro extorsivo	48	48	39	47	61	119	75	161
Secuestro simple	34	23	30	40	16	51	54	37
Secuestro total (casos) -					60	127	108	121
Secuestro total (víctimas)	82	71	69	87	77	170	129	198
Sometidos Caparros -				46	73	67	101	80
Sometidos GAO Clan del Golfo -				99	133	168	205	116
Sometidos GAOR -				2	0	0	0	0
Sometidos Pelusos -				147	206	235	306	196
Sometimiento -								
Terrorismo	437	392	243	365	511	375	515	566
Terrorismo (Art. 343)	358	334	180	293	420	248	246	271
Trata de personas	44	52	26	75	65	100	111	119
Tráfico de migrantes	19	1	2	1	10	21	13	1
Usurpación de tierras	129	100	58	132	90	67	76	64
Violencia intrafamiliar	53483	50489	58925	62355	61675	51115	64107	65816
Voladura de oleoductos	74	35	31	14	18	28	3	21
Voladura de puentes	1	0	0	1	1	0	0	0
Voladura de vías	2	5	47	2	31	10	20	14
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Año							